

Capítulo 3

Resistencia, adaptación e integración en el Chaco Boreal y Central

Fabrizio VÁZQUEZ RECALDE

Introducción

Entre los actores secundarios, los indígenas aparecen como un grupo importante, aproximadamente el 30% de la población total, dentro de la emergencia socioeconómica regional. Si bien el Chaco es un espacio con características físicas y climáticas muy particulares, los indígenas lograron sobrevivir y expandirse mediante el uso apropiado de los recursos naturales y de las tecnologías a las cuales tenían acceso. Posteriormente, con la llegada de otros actores, fundamentalmente las misiones religiosas, los exploradores científicos modificaron las formas tradicionales de vida así como la estructura social del territorio. Este proceso de nueva estructuración de las sociedades autóctonas comenzó con la explotación de quebracho, continuando lentamente con otras actividades económicas extensivas, pero sin afectar demasiado a la totalidad de grupos indígenas.

La gran innovación, en términos de actores secundarios, que se constata con el avance y la expansión de la frontera ganadera, no se reduce a las profundas modificaciones de vida y trabajo de los grupos indígenas, sino que consiste en una redefinición de las relaciones y del poder entre los actores, algunos hegemónicos antiguos, mientras que se asiste, además, a la llegada de diferentes grupos de actores, como las organizaciones no gubernamentales. El «redescubrimiento» del Chaco, sus atractivos estratégicos, sus recursos naturales, sus elementos culturales, son fuertes indicadores de la compleja naturaleza del sistema territorial que se manifiesta por el avance, lento pero sostenido, de la fragmentación del macroterritorio. En efecto, el Chaco ya no está aislado ni desprovisto de interés, sino que comienza a atraer a nuevos actores con estrategias diferentes, y sobre todo en las zonas más alejadas de los escasos centros dinámicos. Los indígenas permanecieron sin problemas hasta la llegada de los inversionistas del quebracho y de los menonitas en el año 1927 poco antes de la guerra del Chaco. El lento avance de la ganadería en la porción Sur del Chaco fue haciendo retroceder a los indí-

genas de esta zona, mientras que los integraba como empleados en las explotaciones, en condiciones de semiesclavitud. Los grupos que se encontraban fuera de estas zonas pudieron disponer aun de mayor cantidad de territorio para continuar con sus sistemas tradicionales de vida.

Cada nuevo evento económico y político en el Chaco tuvo fuertes implicancias en los sistemas de vida de los grupos autóctonos, que vieron retardado el avance de los nuevos actores, más de 300 años con respecto a los indígenas de la región Oriental. En efecto, el «retraso» de la presencia de los conquistadores españoles dio a los indígenas la posibilidad de experimentar una integración menos violenta, pues no se realizó de forma sistemática ni con el uso de la fuerza. Al igual que en el siglo XVI, la estrategia de control territorial se materializa mediante el llamado o la aceptación de ofertas de misioneros de distintos credos religiosos, quienes con el objetivo de evangelizar a los indígenas expandían las zonas «civilizadas». Este proceso de avance lento e intermitente se inició primero en el sur del Chaco con la llegada de una misión inglesa de la Iglesia anglicana, en 1889. Estas misiones estuvieron marcadas también por la aventura y el descubrimiento, ante la atracción que generaban los espacios conocidos como salvajes o inexplorados. Varios exploradores europeos, especialmente franceses, alemanes y suecos, deseaban develar algunos aspectos desconocidos del Chaco, como por ejemplo la navegabilidad del río Pilcomayo, donde había perdido la vida el explorador Jules Creveaux a manos de los indígenas en 1882 (Verón, 2002: 51).

Las comunidades indígenas del Chaco ocuparon espacios vacíos. La instalación del sistema del quebracho, por su restricción natural, no afectó al resto de los grupos. La incorporación de las misiones religiosas en el Chaco se realizó de forma relativamente ordenada en el espacio, no sólo para evitar conflictos ideológicos, sino también para optimizar la labor pastoral de los diferentes grupos. Para el Estado paraguayo, la presencia de grupos religiosos, inclusive de protestantes, fue bien visto ante la necesidad extrema de pacificar a los grupos indígenas, facilitando de esta forma la penetración territorial de las fuerzas económicas nacionales en el Chaco. Para el Estado argentino, fue central expandirse hacia el norte, en particular el Chaco de lo que hoy es la provincia de Formosa, con la finalidad de captar a gran parte de los indígenas considerados paraguayos.

El rol de las misiones religiosas en el Chaco paraguayo

Para el Estado paraguayo, la presencia de grupos religiosos en el Chaco, incluidos los protestantes, fue muy bien percibida en razón de la imperiosa necesidad de pacificar los diferentes grupos indígenas y facilitar la penetración territorial de fuerzas económicas nacionales. De esta forma, se asientan primero los misioneros anglicanos a partir de 1889 en el sur, en las cercanías de las explotaciones forestales tanineras a finales de siglo XIX. El pionero en entrar en contacto con los indígenas del Chaco y establecer una presencia religiosa sostenida fue el misionero inglés Grubb.

En 1925, la misión católica de la congregación Oblatos de María llega al oeste del Chaco para evangelizar a los indígenas. Los misioneros, todos alemanes, comienzan a trabajar con los indígenas bajo la forma de misiones, es decir, en establecimientos duraderos, siendo el inicio del cambio de funcionamiento socioeconómico y territorial de los indígenas, quienes ya no basarían únicamente su economía en la caza, la pesca — cuando estaban cerca del río— y la recolección de frutos, sino que la combinarían en principio con una agricultura y ganadería de sobrevivencia. Además del papel religioso, los misioneros defendieron a los indígenas de los maltratos por parte de los soldados bolivianos y paraguayos, convirtiéndose rápidamente en defensores de la causa indígena, del respeto de sus tierras, pero no de sus tradiciones, propios del antropocentrismo de inicios del siglo xx y de toda actividad misionera. La presencia de estos misioneros católicos constituyó un intento de frenar el posible avance de la religión protestante en el Chaco, no sólo por la presencia de los anglicanos en el sur, sino sobre todo de los colonos canadienses de religión menonita que se habían instalado en el mismo periodo.

En 1928 llega a la zona noreste del Chaco otra misión católica para evangelizar a los indígenas de la zona. En esta ocasión son misioneros salesianos originarios de Italia, y se encargarán de trabajar en el adoctrinamiento católico de los indígenas que habitan la ribera del río Paraguay su extremo norte. El impacto de la guerra del Chaco alteró el sistema de vida de casi la totalidad de grupos indígenas, quienes se encontraban entre los dos fuegos. Si bien este acontecimiento fue intenso y se prolongó por tres años, las sucesivas batallas afectaron sólo a algunas zonas. Una vez terminada la guerra y retirados los ejércitos, el proceso de interacción entre los diferentes grupos humanos comienza para no detenerse. Desde el inicio de las relaciones entre indígenas y soldados, los primeros, al igual que en el resto del país y del continente, pasaron a ocupar el lugar más bajo en la estructura social del Chaco.

Independientemente de los intentos poblacionales, sobre todo a partir de la década de 1960, sólo los poblados asistidos y liderados por las misiones religiosas contaron con servicios de salud y educación, desempeñando aquéllas un rol muy importante al mismo tiempo que reemplazaban al Estado. En las zonas más aisladas, especialmente en el norte y el noroeste, las misiones religiosas trabajan junto a los indígenas en la producción de artesanía y en la reconversión de las economías de recolección hacia sistemas productivos. El Estado paraguayo sólo ha tenido algunas tímidas políticas indígenas destinadas a asegurar tierras para los diferentes grupos. Sin embargo, el proceso de integración subordinada a los demás grupos se produjo de forma irreversible, primero con las empresas tanineras, luego en las colonias menonitas y finalmente en las haciendas ganaderas.

Las presiones del lento avance de la frontera agrícola forzaron la migración y reconversión productiva de los indígenas, quienes demostraron una relativa capacidad de integración, al incorporarse a las zonas urbanas con nuevas ocupaciones económicas. La población indígena del Chaco demuestra una evolución con una clara tendencia al crecimiento, al mismo tiempo que manifiesta la transición demográfica positiva (creci-

miento) con una concentración creciente en la parte central, alrededor de las colonias mennonitas, especialmente después de la crisis del sistema de quebracho en la ribera norte del río Paraguay. De entre estos fenómenos de integración, la atracción, a partir de 1998, de los centros urbanos mennonitas, especialmente Filadelfia, Loma Plata y Neu-land, constituye la experiencia más importante y numerosa. Con una clara tendencia al crecimiento, la población indígena en Paraguay es minoritaria, siempre menos del 2% del total de la población, pero en el Chaco tienen un mayor peso demográfico, representando en el año 2002 el 30% de la población total (cuadros 1 y 2, y gráfico 1).

Cuadro 1. Indígenas en Paraguay
(censo indígena 2002)

Año	Indígenas	Porcentaje nacional
1981	38.703	1,27%
1992	49.478	1,19%
2002	85.674	1,64%

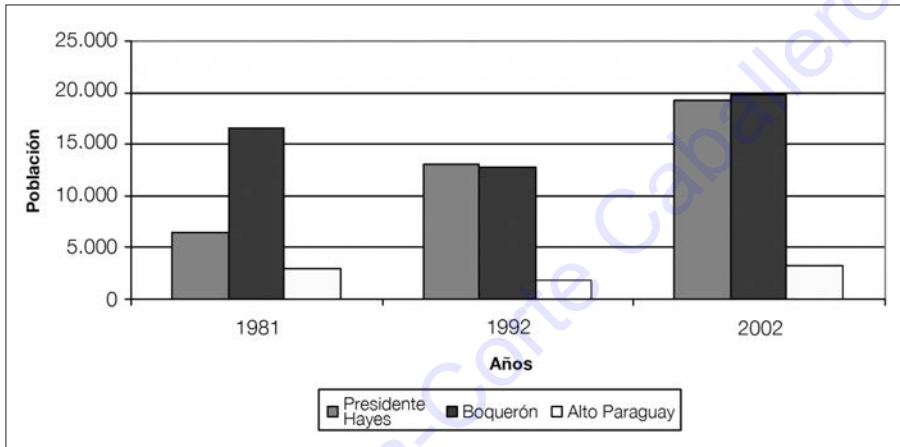
Cuadro 2. Indígenas en el Chaco
(censo indígena 2002)

Año	Presidente Hayes	Boquerón	Alto Paraguay	Total	% de la población total del Chaco
1981	6.512	16.555	2.939	26.006	20,0
1992	12.995	12.759	1.861	27.615	25,6
2002	19.200	19.757	3.194	42.151	29,1

En los cuadros anteriores se puede observar el comportamiento de la población indígena del Chaco desde la perspectiva departamental. Así, el número de indígenas existentes en cada uno de los departamentos es otro poderoso indicador de las transformaciones económicas del Chaco. En el periodo entre 1992 y 2002, los indígenas del departamento de Boquerón son más numerosos y se concentran principalmente en la cuenca del río Pilcomayo, mientras que son más escasos los indígenas de los departamentos de Presidente Hayes y de Alto Paraguay, debido al desmantelamiento de las usinas taníneras. En el censo indígena realizado en 1992, mucho más consistente y organizado que el anterior, se observa un fuerte reequilibrio entre los departamentos de Boquerón y Presidente Hayes, y una caída en el departamento de Alto Paraguay, vinculada a la decadencia del sis-

tema del quebracho que terminaba de forzar nuevas migraciones. También destaca un aumento espectacular en el departamento de Presidente Hayes, donde en 1981 existían sólo 6.512 indígenas, mientras que en 1992 el grupo contaba con 12.995 individuos.

Gráfico 1. Evolución de la población indígena en el Chaco (censos indígenas de 1982, 1992 y 2002)



En el censo realizado en el 2002 se observa un crecimiento en todos los departamentos, consolidándose en los departamentos tradicionales de Boquerón y Presidente Hayes, mientras que Alto Paraguay tuvo un crecimiento fuerte. En este periodo se observa además la concentración de la población indígena en torno a las colonias menonitas, las cuales se sitúan tanto en el departamento de Boquerón como en el de Presidente Hayes. Para intentar comprender mejor el fenómeno demográfico ante el problema de una división administrativa tan extensa, se puede observar el siguiente mapa, donde figura la ubicación de los asentamientos indígenas en el Chaco. Se estima que en el año 2007 existen alrededor de 27.000 indígenas en el denominado informalmente Chaco Central, coincidiendo el área con las tres colonias menonitas ubicadas sobre el vértice de la división administrativa. Entre los diferentes grupos indígenas sobresalen nítidamente, al menos en número, los Nivacle y los Enlhet (mapa 1).

El impulso económico de las colonias menonitas está sostenido por varios grupos de indígenas que migraron en los últimos años hacia el centro del Chaco, donde existe una demanda sostenida de mano de obra. De esta forma, el Chaco central se convirtió en el destino predilecto de las migraciones tanto de los grupos indígenas del sur, como de los de la cuenca del Pilcomayo y de algunos grupos del noreste. No obstante, existen varios grupos indígenas, especialmente los ubicados en el noreste y el sur, que tienen serios problemas de subsistencia debido a la falta de tierras para desarrollar sus sistemas

neofeudal de los indígenas en las estancias hasta la década de 1990 fue un modelo corriente en la gestión de las «estancias» ganaderas, que sólo se interesaban en mantener una producción muy extensiva y desconectada de los mercados. El crecimiento económico de las colonias menonitas fue un poderoso atractivo para los indígenas de diversas zonas, que terminaban por abandonar las estancias. En conclusión, los indígenas en su conjunto son actores secundarios poco móviles pero muy importantes. Los grupos que habitan en la zona próxima a las colonias menonitas experimentan un mayor crecimiento y una fuerte movilidad.

Mennonitas en indígenas, una integración de hecho

Los indígenas cumplen un papel relevante en la economía de las agroindustrias menonitas al constituir un grupo que aporta mano de obra barata y siempre disponible. Paralelamente al aspecto económico, los menonitas interpretaron que la convivencia pacífica e integrada con los indígenas era necesaria para el desarrollo integral de las comunidades. En este escenario, surge en 1978 la Asociación de Servicios de Cooperación Indígena-Mennonita (ASCII). Esta organización tiene su sede en Filadelfia y sus objetivos son acompañar a las comunidades indígenas del Chaco Central en su desenvolvimiento socioeconómico; apoyar sus gestiones en el sentido de asegurar tierras para el asentamiento agropecuario; ofrecer servicios de asesoramiento económico con el fin de fomentar una base de subsistencia sobre tierra propia; y orientar este proceso de acompañamiento en base a una cooperación, respetando la iniciativa y responsabilidad propia de cada comunidad indígena.

La ASCII trabaja con los grupos indígenas en el mejoramiento de los sistemas de salud y de educación, así como en el apoyo a la producción agrícola y ganadera. En el año 1997, esta organización asistió a más de 12.000 indígenas en 14 comunidades, denominadas oficialmente «colonias agrícolas», y reciben capacitación para el cultivo de rubros de consumo y de renta. Consideremos que se mantiene el uso de la nomenclatura colonizadora de los menonitas, los indígenas continúan su historia en el siglo XXI colonizando sus propias tierras ancestrales mediante el pasaje a la agricultura. La Ascim delega en el Servicio de Extensión Agropecuaria (SEAP) las tareas de capacitación productiva. Además, los indígenas crían ganado vacuno, disponiendo de unas 13.000 cabezas en el año 2007. Si bien la producción es de los indígenas, está dirigida por la organización menonita. El área cultivada hasta el año 2004 fue de más de 15.000 hectáreas, siendo el sésamo el principal rubro de renta debido a la buena calidad y a los buenos precios que paga el mercado internacional (cuadro 4).

El cultivo del sésamo tiene en sus inicios niveles fabulosos, pasando de unas escasas 68 hectáreas en 1998 a 2.300 tres años más tarde, con ingresos superiores a los 200.000 dólares. Este éxito contrasta con las sequías estacionales que afectan regularmente al Chaco, como la del año 2003, cuando gran parte de las colonias indígenas del Chaco Central no cosechó producto alguno (Censo Agropecuario 2008). En términos

geográficos, la producción se concentra en el límite de ambos, en el área de influencia de las cooperativas del Chaco Central. Otros rubros de renta son el algodón, el tártago, el maní y el poroto. Todos estos rubros han constituido la base de la agricultura menonita hasta la transición a la producción láctea. Ya a partir de finales de la década de 1990, los menonitas comienzan a orientar sus inversiones productivas hacia la cría de ganado vacuno sin dejar de atender la producción agrícola, fuente histórica de los ingresos. En la estrategia menonita, los indígenas podían dedicarse a las actividades agrícolas que consumían poco espacio y mucha mano de obra, así como tecnología reducida, mientras la ganadería se expandía y requería nuevos espacios, nueva tecnología y sobre todo nuevas fuentes de financiamiento. El circuito inferior de la economía podía ser atendido por los «colonos» indígenas, bajo asesoramiento y asistencia técnica, financiera (y religiosa) de los menonitas, mientras que las cooperativas podían concentrarse en el circuito superior de la economía, mucho más integrada y dependiente de los mercados internacionales y con márgenes de rentabilidad mucho más elevados.

Cuadro 4. El milagro del sésamo de los indígenas (Klassen, 2002)

Categorías	1998	1999	2000	2001
Hectáreas	68	381	1.281	2.300
Producción total en kg	30.619	117.000	430.000	650.000
Ingreso total en US\$	17.870	64.242	240.294	226.605
Número de productores indígenas	166	523	1.020	1.351

El acompañamiento y apoyo a las comunidades indígenas puede ser entendido dentro de un juego de estrategias complejo y compartido entre la economía y la ideología. La mayor parte de las comunidades asistidas se ubican en el sur y al este de las colonias, constituyendo importantes «barreras protectoras» entre las colonias y el exterior, además de «fijar durablemente» a una población indígena migrante. Desde el punto de vista ideológico, los menonitas buscan incorporar a los indígenas a la racionalidad occidental capitalista, y guían la integración cultural y económica de éstos, dentro de un esquema antropocéntrico. En términos espaciales, las colonias agrícolas indígenas experimentaron también una transición a la vida semiurbana y a la sedentarización estable, repitiendo el modelo menonita, que había tenido excelentes resultados. En efecto, los éxitos no tardaron en llegar a la agricultura indígena, especialmente con el sésamo, con elevados índices de productividad y rentabilidad. Para estos logros, los indígenas tomaron créditos de la Fundación Indígena para el Desarrollo Agropecuario (FIDA), institu-

ción próxima a la Ascim que brinda una asistencia financiera con un sistema de créditos rotativos destinados a mejorar la producción agrícola, pero siempre bajo la tutela de la Ascim. A inicios de la década de 2000, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había facilitado medio millón de dólares para los emprendimientos productivos indígenas administrados por la Ascim. Para el año 2006, las colonias indígenas también se dedicaban a la cría de ganado vacuno.

A este conjunto de transformaciones económicas y territoriales lo denominamos «revolución neolítica asistida», y da cuenta del proceso de cambio y adecuación cultural vividos por los indígenas, con beneficios para ambos grupos, siendo para los indígenas el mejoramiento del nivel de vida o la aculturación integradora, de carácter netamente económico pero no cultural, mientras que para los menonitas significa paz social. Una crítica a este sistema de gestión dirigida de los asentamientos indígenas es que los menonitas repiten la persecución religiosa y social, al menos indirecta, que ellos habían sufrido en Europa y Canadá. Como lo indica Glauser:

«Afectados por un conflicto religioso europeo del siglo 18, los indígenas del Chaco Central viven hoy, dentro de las colonias menonitas, en un sistema de tipo “apartheid” —quiere decir no verdaderamente integrados (el concepto de “apartheid” podría también ser invocado para la descripción de otras situaciones que vivimos en la sociedad paraguaya); tienen que competir con los intereses expansivos menonitas de asegurar tierra, y constituirán probablemente el estrato social “problema” del futuro de las ciudades menonitas—; hoy en día aun los menonitas consiguen mantener los sin-tierra indígenas más lejos de las colonias» (Glauser, 1996:5).

En síntesis, los diferentes grupos indígenas de las diversas regiones del Chaco experimentaron importantes cambios en sus formas de vida. Algunos grupos pudieron subsistir con el apoyo tanto económico como institucional de la Iglesia católica. Éste es el caso de las comunidades indígenas asistidas y bajo la tutoría del Vicariato Apostólico del Pilcomayo, cuyos líderes religiosos, en su mayoría alemanes, gestionan importantes ayudas en Europa, especialmente de Alemania y del Vaticano, para las obras sociales y religiosas en los lugares más aislados. Las comunidades ribereñas de San Leonardo y Pedro Peña sobre el río Pilcomayo son muestras claras de comunidades indígenas y paraguayas sostenidas por los misioneros. A finales de la década de 1980, la Iglesia católica instala una emisora radial de alcance regional y de carácter multiétnico y cultural. Esta emisora se convierte en la llave maestra de la conectividad y comunicación de informaciones entre las diferentes comunidades atendidas por la Iglesia católica, tanto el Vicariato Apostólico del Pilcomayo, en el departamento de Boquerón, como del Vicariato Apostólico del Chaco, en el departamento de Alto Paraguay. Los poblados ribereños del río Paraguay son asistidos por el Vicariato Apostólico del Chaco, cuyos límites coinciden con el departamento de Alto Paraguay. Sus misioneros tienen fuertes conexiones con Italia, país de origen de los primeros religiosos. La porción sur del Chaco, el departamento de Presidente Hayes, era la única administración eclesial gobernada por misioneros paraguayos, restringiéndose espacialmente a la zona contigua a Asunción,

las ciudades de Villa Hayes y Benjamín Aceval. Finalmente, y a pesar los diversos apoyos recibidos, los indígenas siguen siendo actores secundarios, mano de obra de los menonitas y de los ganaderos.

Campesinos ganaderos, pero dependientes

La interacción indígena-mennonita es mucho más antigua que la relación entre los menonitas y el resto de los paraguayos no indígenas. En efecto, la incorporación tardía del Chaco al espacio económico nacional no fue el resultado de una colonización interna, por lo que la llegada de campesinos, obreros y profesionales no fue sistemática, intensificándose recién a partir de la construcción de la ruta Transchaco. Si bien los menonitas tenían contacto con los estancieros del sur, que ayudaron a la construcción de la ruta, los contactos con la alteridad se reducían al mínimo, no tanto por falta de interés o de deseo gregario, sino por las escasas oportunidades. Los circuitos inferiores de la economía regional (Borda y Masi, 2002) y nacional habían conservado estos dos mundos casi sin conectarse hasta la década de 1970.

Los asentamientos campesinos en el Chaco tienen su origen en algunas experiencias colonizadoras impulsadas por los militares, el Vicariato Apostólico del Pilcomayo y en migraciones espontáneas desde otros puntos del Chaco, especialmente de la zona ribereña del río Paraguay. A excepción de los asentamientos asistidos por la Iglesia católica, pocas fueron las experiencias duraderas, debido principalmente a la escasa disponibilidad de medios financieros y técnicos para iniciar una colonización. Además, las experiencias de instalación de campesinos casi siempre se reducían a la repartición de tierras e implementos agrícolas, nunca acompañadas de un paquete tecnológico, institucional y de servicios que aseguren el arraigo. El Estado paraguayo (Frutos, 1982: 73) ha desarrollado, a inicios de la década de 1970, algunas políticas mínimas de ocupación y colonización del Chaco a partir de la instalación de colonias de pequeños productores agrícolas. Para organizar la colonización se formó la Comisión Nacional para el Desarrollo del Chaco, dependiente del Ministerio de Defensa. Esta institución orientó el parcelamiento de grandes superficies de tierra para preparar la llegada de los colonos. En el noroeste, en la zona denominada «La Patria», la Comisión disponía de más de 800.000 hectáreas que debían ser divididas en parcelas de 2.500 hectáreas para cada propietario (nótese el contenido patriótico y relacionado con la «nación» del nombre del asentamiento, así como la institución encargada de realizarla, el Ministerio de Defensa; cuarenta años después de la guerra del Chaco (1975), este espacio seguía siendo administrado con estrategias militares pero con tácticas civiles). Finalmente, este intento fracasó por la insuficiencia de lluvias y por las grandes distancias de los centros logísticos y de consumo.

Otra iniciativa de la Comisión se realizó en el norte del Chaco, en la frontera con Bolivia, donde se definieron tres tipos de parcelamiento: los ganaderos de 4.000 hectáreas, los agropecuarios de 2.500 hectáreas y, por último, los de 3.000 hectáreas tanto

para proyectos agrícolas como ganaderos. La superficie planificada para la colonización fue de 1.500.000 hectáreas. En esta zona se encontraban las colonias de San Alfredo y Sierra León, conformadas con campesinos provenientes del sur de la región Oriental. Ambas experiencias tuvieron una existencia efímera, sólo Sierra León resistió con una población de quince familias. Varias décadas después, a inicios de 2003, un grupo de 100 familias provenientes de Luque, distrito vecino a la capital, Asunción, reforzó esta colonia, disponiendo de 300 hectáreas por familia. Siete meses después, casi la totalidad de los colonos abandonó la colonia por falta de capacidad productiva.

Más allá de estas experiencias sin éxito, surgieron algunas pequeñas comunidades urbanas que, anteriormente, vivían al costado de la ruta Transchaco, como la comunidad de Teniente Irala Fernández, Falcón y Pablo Miki (Durand y otros, 1993). El Vicariato Apostólico del Pilcomayo facilitó los lotes y formó barrios siempre al costado de la ruta, pero agrupándolos y circunscribiéndolos a una zona determinada (recordemos que el Vicariato Apostólico del Pilcomayo había recibido más de 15.000 hectáreas del Estado en 1966). Las parcelas urbanas no se regalaban, sino que los ocupantes pagaban cuotas mensuales que alimentaban un fondo rotatorio —administrado siempre por las autoridades religiosas— que sirve para otros proyectos sociales. En este caso, al igual que otras intervenciones territoriales de las instituciones católicas, los asentamientos urbanos no obedecían a políticas locales o regionales, sino a las estrategias y medios de los actores más fuertes.

En el caso de los asentamientos rurales, las tierras han sido compradas o administradas por la Iglesia católica para los campesinos. En estos asentamientos primaba una economía basada en cultivos de subsistencia y en una ganadería rudimentaria en manejo, combinando ingresos con el trabajo asalariado y temporal en estancias y en las colonias mennonitas. La mayoría de los asentamientos campesinos del Chaco se ubica en un radio no mayor de 100 kilómetros de las colonias mennonitas. Los asentamientos más importantes son Campo Aceval y Jorba, entre otros. En total, el Vicariato Apostólico del Pilcomayo ha formado un total de 21 comunidades, con más de 16.000 hectáreas asistidas.

Después de la formación de las comunidades tanto urbanas como rurales, éstas subsistieron sin conocer una integración económica local, sino que funcionaban como islas territoriales. Algunos de los asentamientos rurales comenzaron a recibir asistencia técnica y facilidades financieras para incorporarse a la red de producción lechera, a partir de finales de la década de 1990, alimentando de esta forma las agroindustrias mennonitas. Éste es el caso de Campo Aceval y Santa Cecilia, donde surgieron pequeñas cooperativas que crecieron en los últimos años al convertirse en fuentes de materia prima para la industria láctea mennonita. En 2002, la Cooperativa Campo Aceval, con sólo 230 asociados, proveyó en promedio más de 8.000 litros de leche por día a las cooperativas mennonitas. La cooperativa Quebracho, más nueva que la anterior, aportó en promedio 10.000 litros de leche, con sólo 220 asociados. La cooperativa mennonita Chortitzer es la principal compradora de la producción lechera de estas cooperativas menores.

Al igual que los indígenas, los asentamientos campesinos desempeñan entonces un papel importante en las transformaciones económicas del Chaco Central, siendo actores secundarios que, aliados a los menonitas, logran insertarse de forma exitosa en la economía local y nacional. Desde las agroindustrias menonitas, estos asentamientos aseguran, aunque en muy baja proporción, el funcionamiento de la cadena láctea. Ante el creciente desinterés de los menonitas por la producción láctea —debido a los escasos márgenes de rentabilidad—, la incorporación de estas colonias al sistema productivo representa una gran oportunidad para que los productores menonitas de leche menos acaudalados, puedan reconvertir sus fincas hacia la ganadería de carne. Con estos procesos, el sistema productivo menonita expande sus influencias en el espacio al mismo tiempo que integra otros actores en su sistema económico, generando una alianza económica que brinda más beneficios a los menonitas que a los demás asociados, indígenas y campesinos, no en términos de precios pagados o de justicia social, sino en el sentido de que los menonitas disponen de un mayor margen de maniobra para seguir manteniendo y sosteniendo una estructura productiva en declive, la agricultura y la producción de leche, mientras dedican sus fuerzas a concentrarse en la producción bovina de carne, lo que exige no sólo una expansión territorial, sino sobre todo un nuevo dispositivo de conocimientos técnicos e institucionales.

Finalmente, ya en el siglo xx, el sistema de actores del Chaco, inicialmente compuesto por indígenas, luego con industriales y empresarios del quebracho, y posteriormente misioneros religiosos, va a recibir a partir de la década de 1970 un nuevo grupo de actores que va a modificar muy poco la estructura territorial, pero que servirá para asegurar una presencia que, aunque débil, se revela al menos como sostenida en el tiempo.

Discursos y pretensiones de actores internacionales sobre el Chaco

Una de las características de los nuevos actores es que casi su totalidad provienen del exterior. Distintas lógicas alimentan el sistema de actores; mientras algunos se concentran en los aspectos geopolíticos, otros lo hacen en las infraestructuras de desarrollo. Los recién llegados, a partir de finales de la década de 1990, se vinculan a la gestión de los recursos naturales y a la defensa de los derechos de las comunidades indígenas. Entre los distintos objetivos y estrategias de los proyectos de la cooperación internacional, dos modelos se sucedieron en el Chaco. El primero, relacionado fuertemente con estudios de diagnóstico, primero ambiental y luego del desarrollo económico integral y, el segundo, constituido por los proyectos orientados a la intervención en el territorio. En todos estos proyectos, la contraparte oficial, política y muy pocas veces financiera, fue el Estado paraguayo, quien se limitaba a aceptar los proyectos de cooperación.

Otra clasificación de la cooperación podemos realizarla en función del tamaño de las mismas. Inicialmente fueron organizaciones internacionales supranacionales; posteriormente, éstas ceden el lugar a instituciones privadas transnacionales. Si pensamos en

los proyectos de desarrollo económico, el Chaco, como espacio periférico, es concebido como una región a desarrollar, especialmente por actores internacionales que se interesan en el Chaco y en el descubrimiento o revelación de sus ventajas económicas y ecológicas. En un primero momento, un fuerte interés por parte de organismos internacionales tendía a la gestión del río Pilcomayo, situado entre Paraguay, Bolivia y Argentina. En los primeros años de la década de 1970, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) inician los estudios para la «Planificación del Desarrollo de la Cuenca del río Pilcomayo», donde la preocupación principal consistía en la gestión del río y sus respectivos usos, especialmente el aprovechamiento de sus aguas itinerantes (el río Pilcomayo tiene un comportamiento errático, ya que se alimenta básicamente de los deshielos en los Andes; cuando llega al Chaco, debido a la escasa pendiente y por arrastrar mucho contenido de tierra, termina por auto-colmatarse, por lo que cada año las aguas deben crear nuevos surcos). Otro de los objetivos de estos proyectos fue la identificación de oportunidades de inversión económica. La segunda fase de este proyecto termina en 1980 con el estudio específico para el «Desarrollo del área Paraguaya del Proyecto Pilcomayo», alrededor de 19.000 km², e incluía varias propuestas productivas y sociales orientadas a corto y medio plazo. El monto de la inversión para llevarlos a buen término era de 48 millones de dólares, cifras respetables para un modesto sistema de inversión pública.

Si bien el comportamiento del río Pilcomayo era conocido, la cooperación internacional jugaba sus propias cartas en el Chaco, pues para los países involucrados, Paraguay y Argentina, esta zona era profundamente periférica y fuera de las estrategias económicas centrales. No obstante, existieron algunas confrontaciones diplomáticas entre los gobiernos militares de ambos países durante la década de 1970. La canalización por parte de Argentina de parte de las aguas del río Pilcomayo fue el origen de la disputa e indefinición de la frontera entre ambos países.

Esta situación geopolítica, sumada a la estrategia del Estado paraguayo de poblar el Chaco, o al menos de demostrar un fuerte interés en incorporarlo a la vida nacional, hace que surja en 1976 la Comisión Nacional de Desarrollo Integrado del Chaco dependiente del Ministerio de Defensa, confirmando las hipótesis de que en el Chaco los intereses estratégicos nacionales eran de carácter militar, específicamente de protección de fronteras (nótese lo moderno de la terminología y la connotación de la palabra «integrado», propio de los proyectos y enfoques de la época, que tenían la intención de integrar las diferentes dimensiones del desarrollo). Un militar de alta graduación a quien entrevistamos nos confirmó el ambiente de preocupación fronteriza en el Chaco, sobre todo en la zona fronteriza con Bolivia en las décadas de 1970 y 1980. Esto se aprecia además en los mapas oficiales del Chaco, elaborado por los militares. En ellos el Chaco aparecía sin espacios vacíos, en todas las zonas existían fortines y cuarteles, así como haciendas ganaderas, cuando la realidad era otra. Si bien existían varios fortines, éstos no cubrían todas las fronteras, pues se concentraban en la línea fronteriza con Bolivia. La Comisión Nacional de Desarrollo Integrado del Chaco no obtuvo grandes logros en el terreno, aunque se fortaleció la presencia de militares, quienes se convertían en los gestores del

desarrollo, reafirmando la idea de que el territorio chaqueño era un espacio estratégico de prioridad en la defensa de su soberanía.

En el año 1978, la Secretaría Técnica de Planificación, dependiente directamente de la presidencia de la República, inicia un proyecto de Aprovechamiento del Área de Influencia de la Ruta Transchaco, con la intención de dinamizar la zona circundante a dicha ruta. En efecto, en este periodo la ruta iniciaba un crecimiento lento en el flujo de transporte entre la capital del país y las colonias menonitas. Este proyecto debe ser entendido dentro de una política nacional de énfasis en la dotación de infraestructura vial para integrar zonas periféricas, favoreciendo el desarrollo económico. En la región oriental, el Estado iniciaba una fuerte estrategia de desarrollo basada en la construcción de rutas para elevar la conectividad de los actores. El proyecto más importante fue el denominado Plan Triángulo, que consistía en la apertura y pavimentación de rutas entre las ciudades de Asunción al oeste, Encarnación al sur y Puerto Presidente Stroessner al este (hoy llamada Ciudad del Este, luego de la caída de la dictadura militar de Stroessner en 1989). La iniciativa de activar la «economía rutera» consistía en brindar asistencia técnica a los productores ganaderos, casi todos grandes y con sistemas de explotación superextensivos. El objetivo principal consistía en incentivar y mejorar la producción y la comercialización del ganado, pero ante el ausentismo de los productores rurales, este proyecto no tuvo impactos mayores.

Más tarde, ya en los primeros años de la década de 1980, la cooperación internacional refuerza su preocupación en la cuenca del río Pilcomayo. La Organización de Estados Americanos (OEA) inicia el Proyecto para Uso Diversificado de la Cuenca del Pilcomayo. Este proyecto, al igual que los demás provenientes de la cooperación internacional, produjo varios documentos técnicos y científicos de gran valor. No obstante, estos proyectos binacionales muy pocas veces incidieron en las políticas públicas para administrar el río en cuestión, convirtiéndose más que nada en unidades de investigación y fuente de datos para los gobiernos respectivos, que capitalizaron de forma diferente las informaciones científicas. En 1983, la OEA inicia un nuevo proyecto en el Chaco, esta vez fuera del ámbito científico del río Pilcomayo. La nueva iniciativa del organismo internacional se denomina «Estudio y estrategia para el desarrollo del Chaco Paraguayo». En esta ocasión, el área de interés pasa del río Pilcomayo a la totalidad del territorio chaqueño. Así también, del énfasis en los aspectos físicos y geológicos se pasa a una dinámica del desarrollo con un fuerte componente económico y humano. Este proyecto exigió un diagnóstico socioeconómico muy detallado, con el objetivo de detectar nuevas actividades económicas, casi todas agrícolas y pecuarias, en función de la disponibilidad de recursos naturales y de las características ambientales. Éste es el primer proyecto que realiza una propuesta de desarrollo a nivel regional, trascendiendo el estudio de las condiciones de suelo, clima e hidrología, con el fin de asegurar una ocupación duradera del territorio. Según el diagnóstico y la estrategia del Desarrollo Regional Integrado del Chaco Paraguayo del Gobierno de la República del Paraguay de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (Asunción, 1983), los objetivos del proyecto fueron «la incorporación definitiva y plena del Chaco Paraguayo a la actividad económi-

ca y productiva del país, mediante el aprovechamiento racional de sus recursos naturales». Los objetivos específicos consistían en orientar el desarrollo equilibrado entre las regiones oriental y occidental del país; promover la participación del Paraguay en el desarrollo de la Cuenca del Plata; ocupar y desarrollar el territorio chaqueño con población radicada permanentemente en asentamientos productivos y económicamente viables. La ganadería aparece como la actividad con mayor potencialidad para el desarrollo del Chaco. A tal efecto, el estudio identificó tres áreas principales: las subregiones del Bajo Chaco, del Alto Paraguay y del Centro Este y Sureste.

Las conclusiones del estudio inicial identificaron las posibles actividades económicas y las infraestructuras necesarias para llevarlas a cabo, siendo éstas diversas y complejas, pues incluían materiales y equipos no disponibles en la región, así como importantes costos de instalación. Las recomendaciones del estudio al Estado paraguayo hacían relación a la necesidad de dividir el territorio del Chaco en «áreas Programas», es decir, espacios de intervención específica más reducidos. El estudio recomienda el mejoramiento de las infraestructuras y los servicios, así como la ampliación de la difusión de tecnologías adaptadas al medio chaqueño y el fortalecimiento de los núcleos poblados subregionales. El estudio termina con la identificación de 49 ideas de proyectos específicos, en los ámbitos productivos, sociales y de apoyo de infraestructuras, con una inversión estimada de 450 millones de dólares. Es muy probable que el Estado paraguayo haya solicitado esta cooperación técnica internacional, no reembolsable, como señal de interés de integrar el Chaco en la vida nacional, pero que no haya tenido una extrema necesidad en efectivizarlo. Una de las posibles causas de este «interés de estudios y propuestas» es la concepción del Chaco como espacio en reserva, además de las fuertes dinámicas y oportunidades que surgían en ese mismo periodo en la región Oriental, donde la construcción de la represa hidroeléctrica de Itaipú inyectaba mucho capital, además de la «marcha al Este» a la cual nos referimos antes. En este escenario territorial nacional, aunque el Chaco pudo haber representado algunos desafíos interesantes, la «seducción del Este» (en la región Oriental) era muy poderosa, llevando al Estado a concentrarse en ella. Estos factores nos conducen a considerar las políticas públicas en el Chaco como incompletas, efímeras y sin una intención real, manteniendo la estrategia de «hacer saber» que el Chaco se prepara para el desarrollo, sin una intervención clara en el mismo. El gobierno militar seguía considerando el Chaco como un espacio en reserva a administrar con criterios militares y estratégicos fronterizos.

Ya en el periodo democrático, en 1992 se inicia la cooperación del gobierno del Japón, a través de su agencia de cooperación internacional, la JICA, para realizar un estudio sobre las posibilidades de desarrollo económico de la porción sur del Chaco, el departamento de Presidente Hayes. Este proyecto, denominado también «Proyecto Bajo Chaco», produjo un estudio profundo sobre casi todas las opciones de producción agropecuaria e industrial, así como sobre la instalación de infraestructura social destinada a ocupar de forma duradera esta región. Al igual que los demás proyectos de desarrollo económico, la filosofía central del proyecto consistía en encontrar los modelos «adaptados» a las condiciones del Chaco, en este caso las zonas húmedas y las praderas de palmares, mientras que

al centro y norte del Chaco la adaptación se realizaba en torno al ecosistema seco y semiárido. Los resultados de este estudio, terminado en 1994, son profusos documentos con la descripción de las técnicas productivas y modelos de infraestructuras, en fin, toda una hoja de ruta para desarrollar esta región. Al igual que los otros estudios, también la implementación de este proyecto demandaría fuertes recursos financieros, especialmente en la instalación de infraestructura de transporte, costos difícilmente recuperables a corto plazo. Como en los intentos anteriores, el estudio sólo produjo mayor conocimiento de las oportunidades productivas del Chaco, demostrando al mismo tiempo que el nuevo periodo democrático no modificaría el modelo de inversión y desarrollo histórico del país, centrado y concentrado sobre la región Oriental, relegando al Chaco a un papel secundario. Es muy probable que el origen de la cooperación japonesa hayan sido las condiciones obvias de desarrollo económico del Chaco percibidas por los técnicos nipones y propuestas luego al gobierno, que aceptó la idea sin mayores compromisos. Finalmente, los proyectos de desarrollo económicos, en particular los planteados por la cooperación internacional, no han modificado la estructura territorial del Chaco pero sí han conducido a imaginar una estrategia de administrar la soberanía por parte del Estado paraguayo. Otra transición se produce entre las décadas de 1980 y 1990, con la preocupación de los organismos internacionales de cooperación, que se interesan en la problemática ambiental.

El Chaco como territorio ambiental

Una transición importante ocurre en 1985, cuando la cooperación internacional innova con la incorporación del interés ambiental en los proyectos. Con el apoyo financiero del Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se inicia el proyecto «Sistema de áreas Silvestres Protegidas para el Gran Chaco». Si bien se trataba de una iniciativa regional, que incorporaba también a Bolivia y Argentina, es el primer proyecto que descubre el valor de los recursos naturales. Esta iniciativa no tuvo mayor trascendencia, realizándose sólo algunos encuentros científicos, donde especialistas en biología, áreas protegidas y ecologistas propusieron la creación de una red de áreas protegidas. Finalmente, se realizaron estudios para enriquecer el diagnóstico ambiental, además de concebir el gran Chaco sudamericano como un territorio natural y biológico, aprovechando la escasa densidad demográfica y el estatus de espacio periférico de cada uno de los países.

El gobierno de Alemania, a través de su agencia de cooperación internacional GTZ, instala en el año 1986 una Estación Experimental Chaco Central (EECC) en el centro del Chaco, en la zona de influencia de las cooperativas menonitas. La cooperación alemana tenía dos objetivos principales, en primer lugar, la preocupación por la degradación de los recursos naturales como resultado de la expansión de la frontera agrícola, especialmente en las cooperativas menonitas, y, en segundo lugar, el apoyo técnico y científico para detectar los modelos productivos «adaptados» a las condiciones ambientales del Chaco. Con un arsenal tecnológico-agrícola, la Estación Experimental logró

importantes avances en la adaptación de varios rubros agrícolas, así como en variedades de pastos y otras especies vegetales para la alimentación del ganado vacuno. Lo innovador en este periodo es el inicio de una línea de trabajo en temas ambientales que no va a dejar de aumentar, especialmente a partir de 1990, lo que consolidará la perspectiva natural, sobre todo salvaje, del Gran Chaco, además de generar la idea «reserva natural» que justifica el escaso poblamiento del territorio, así como las dificultades ambientales de la instalación de sistemas agrícolas.

En la década de 1990, se intensifica la preocupación por los recursos naturales, la contaminación ambiental y los modelos de desarrollos en el continente, y especialmente en Paraguay. En este contexto, la región Oriental mantuvo su primacía sobre el Chaco, a causa de las fuertes transformaciones del uso del suelo por el avance de la agricultura mecanizada. Varias organizaciones no gubernamentales surgen en Asunción para trabajar en el ámbito del Desarrollo Sustentable, teniendo a la región Oriental como ámbito privilegiado de intervención. La cooperación internacional acompañó este movimiento de preocupación por la situación ambiental. El primer desafío fue inventariar y conocer en profundidad los diversos ecosistemas del país, para lo cual varias organizaciones de cooperación regional e internacional apoyaron a los organismos públicos paraguayos. La cooperación internacional oficial del gobierno alemán fue una de la más fuertes y sostenidas en el tiempo; fue una de las escasas experiencias donde se incorporaba al Chaco como espacio de intervención.

Desde 1991 hasta 1997, el proyecto «Sistema Ambiental del Chaco», con apoyo financiero y técnico del Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR), trabaja en la compilación de trabajos anteriores que permitan enriquecer el conocimiento de los suelos, la fauna y la flora del Chaco. Los productos de este proyecto son un conjunto de estudios técnicos muy especializados que sirvieron para proponer sistemas productivos compatibles con los recursos naturales, así como para identificar áreas prioritarias de conservación. La contraparte de este proyecto fue el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que contaba en ese entonces con dependencias asociadas a los desafíos ambientales, como la Dirección de Ordenamiento Ambiental. Este proyecto tiene fuertes implicancias para la construcción de la visión que tendrán las autoridades nacionales sobre el Chaco, reforzando la perspectiva ambiental del mismo. Si bien los estudios se orientaban a la gestión ambiental del Chaco e incorporaban las actividades económicas, el sesgo principal era la conservación, sobre todo de las zonas más frágiles, que se correspondían con las zonas más productivas, las colonias menonitas.

Otro factor de relevancia que reposiciona al Chaco en el escenario nacional es el cambio de régimen político en Paraguay en 1989. La caída de la dictadura militar afectó fuertemente la gestión del Chaco, pues el gobierno venía administrando esta región con criterios militares; en ella las fuerzas armadas tenían una presencia activa y visibilidad mayor, siendo actores primarios del Chaco, pero sin generar desarrollo local o regional, puesto que no eran actores económicos y muy pocas veces pudieron acompañar a las comunidades. Así también, a partir de 1990 algunos militares comenzaron a ser denunciados por actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas, vehículos y

extracción de recursos naturales, desgastando el papel que habían desempeñado antes. Lentamente, los militares dejaron de tener la trascendencia de las décadas anteriores, lo que se tradujo en una reducción del número de soldados y en una fuerte disminución de recursos económicos para el mantenimiento de los cuarteles. Esto significó, obviamente, una erosión sensible primero, a inicios de la década de 1990, que se acentuó a finales de la misma década. Asimismo, los militares que tenían propiedades, producto de sus privilegios políticos, fueron vendiendo paulatinamente sus «estancias». Este proceso de apertura y libertad posdictadura militar significó paradójicamente una menor presencia e importancia del Chaco dentro del esquema territorial nacional, que anteriormente estaba más controlado por los militares. El nuevo escenario del Chaco dio lugar a otros actores, quienes con discursos y proyectos modernos, los del Desarrollo Sustentable y la Conservación, ganaban lugar y preponderancia en las políticas públicas, reforzando la imagen de un Chaco salvaje y en peligro de degradación. La presión y apoyo de la cooperación internacional encontró eco en las organizaciones no gubernamentales y en las nuevas oficinas públicas dedicadas a la gestión y protección ambiental. Así se materializaron y confirmaron varias zonas previstas para la conservación en los años sesenta y setenta, pero que carecían de delimitación y estatus jurídico.

A finales de la década de 1990, el Chaco comienza a ser considerado como una zona prioritaria de protección ambiental mediante la creación o consolidación de Áreas Silvestres Protegidas. Para inicios de la década de 2000, se complementan con propiedades privadas registradas como zonas de protección de dominio privado. A mediados del año 2001, surge la Reserva de Biosfera del Chaco, con poco más de cuatro millones de hectáreas, donde una parte corresponde a varios parques nacionales. Por iniciativa de la Unesco y de su programa Reservas de Biosfera, fue detectada y delimitada una zona del Chaco, que fue declarada como tal, con más de 4.500.000 de hectáreas. Según la Fundación Moisés Bertoni, en su trabajo *Biodiversidad del Paraguay, una aproximación a sus realidades*, de la USAID del Banco Mundial (GEF, Asunción, 2007: 255 (Seam, 2007)), las Reservas de Biosfera:

«Son áreas de ecosistemas terrestres y costeros que promueven soluciones para conciliar la conservación de la biodiversidad con el desarrollo sostenible. Son reconocidas a nivel internacional, designadas por los gobiernos nacionales y permanecen bajo la jurisdicción de los estados donde se encuentren. Sirven de alguna manera como laboratorios vivos para comprobar y demostrar la gestión integrada de tierra, agua, y biodiversidad, la personificación de enfoque por ecosistema que desarrolló el convenio sobre Diversidad Biológica».

Las áreas en verde son los parques mientras que las zonas más claras corresponden a parcelas de propietarios privados. Aquí surge una contradicción seria, pues las ONGs y la Unesco «dibujaron» sobre el mapa la zona de Reserva de Biosfera, pero carecen de los instrumentos jurídicos para obligar y disponer en términos prácticos del uso de suelo en las propiedades privadas. Muy al contrario, el avance de la frontera agrícola en la Reserva de Biosfera es constante, alimentada por los bajos precios de la tierra, tal como hemos

visto en el capítulo anterior. La Reserva de Biosfera de la Unesco parece ser sólo una buena intención internacional, fuera del escenario local y regional, observando las áreas protegidas públicas y privadas. De acuerdo con la Secretaría del Ambiente del año 2007, la superficie en hectáreas de las reservas naturales públicas y privadas son las siguientes:

	Tinfunque	241.820
	Tte. Agripino Enciso	40.000
Parques nacionales	Médanos del Chaco	514.233
	Río Negro	123.786
	Defensores del Chaco	720.000
	Chovoreca	100.953
	Monumento natural	Cerro Cabrera-Timane
	Toro Mocho	18.000
Reserva natural privada	Ñu Guazú	50.000
	Cañada del Carmen	3.973
	Palmar Quemado	9.478
Total en hectáreas		1.948.066

El Chaco ejercía una gran atracción como espacio periférico, poco poblado y con grandes superficies en estado prístino. La Unión Europea se muestra interesada en ayudar financieramente con una experiencia de Desarrollo Sustentable en la región, dando lugar en 1996 al Programa de Desarrollo Duradero del Chaco Paraguayo, conocido por sus siglas como PRODECHACO. Este nuevo proyecto era el primero en disponer de los medios técnicos, financieros y logísticos para intervenir en todo el Chaco. Tomando en cuenta los estudios anteriores, muy centrados en los aspectos físicos y biológicos, generaron diagnósticos sociales para una rápida acción en el terreno. El objetivo principal de este proyecto fue «ayudar al Paraguay a lograr el desarrollo duradero de la región occidental del país (Chaco paraguayo) sobre la base de la participación activa de todos sectores de la población chaqueña, sin menoscabo de la protección del medio ambiente» (*Informe final del proyecto de PRODECHACO*, Asunción, 2004: 2). Los objetivos específicos hacían referencia a la promoción de «una política de desarrollo de la región que favorezca actividades productivas respetuosa del medio natural, poniendo especial atención a la población del Chaco con énfasis en la población indígena; formar y sensibilizar la población de la región y la sociedad a escala nacional para generar conocimientos tecnológicos para un desarrollo sostenible de la región; favorecer el acceso de la población necesitada a la tierra y su integración gradual al desarrollo económico del País» (Prodechaco, 2004: 2).

Este proyecto contó con un presupuesto de 18 millones de euros, de los cuales la Comunidad Europea aportó casi 15 millones para promover el desarrollo sustentable del

Chaco. La contraparte paraguaya en la ejecución y seguimiento fue el Ministerio de Agricultura y Ganadería. La ejecución de las actividades se centró fuertemente en la promoción de las comunidades menos favorecidas, los indígenas y demás poblaciones aisladas, principalmente las ribereñas del noreste. La escala macrorregional del proyecto así como un conjunto de dificultades políticas e institucionales hicieron que éste no tuviera un rumbo claro, donde el apoyo y la asistencia técnica a las comunidades no fueron sostenibles en el tiempo.

Una de las áreas prioritarias fue la asistencia a las comunidades indígenas, donde el proyecto buscó la regularización jurídica de las tierras y la instalación de sistemas productivos apropiados, como el cultivo de algunos rubros agrícolas y la producción de miel. Uno de los logros principales de esta iniciativa fue la instalación de infraestructura social y diversos equipamientos para los servicios de salud y educación de las zonas más relegadas del Chaco, supliendo, aunque de forma incompleta y esporádica, el papel del Estado.

Los resultados finales de este proyecto han sido muy relativos al no contar con una metodología de trabajo definida. La tendencia fue facilitar a las comunidades paquetes tecnológicos e infraestructura en función del pedido de las mismas, sin que se instalen las condiciones mínimas de sostenibilidad, repitiendo así las prácticas asistencialistas propias de modelos de gestión del desarrollo basados en la instalación de infraestructura. La falta o modificación constante de líneas estratégicas conspiró contra los objetivos superiores del proyecto, quedando las comunidades asistidas de vuelta a una situación de extrema fragilidad una vez terminado el proyecto.

En un análisis, y una crítica, desde la perspectiva indígena, Thorndahl (1997: 163) explica el contexto mundial del Desarrollo Sustentable y la participación de la Unión Europea en «experimentar» modelos de desarrollo en uno de los últimos (grandes) rincones naturales del mundo: el Chaco. Thorndahl indica que «el Chaco paraguayo ha sido designado como uno de los espacios mundiales privilegiados para concretizar los objetivos y enfoques de la conferencia de Río 1992. La política de desarrollo sustentable, que recupera el saber autóctono, es ciertamente muy seductora comparada con la antigua lógica colonial. Esta política continúa con la antigua influencia, pero reactualizando el mito de territorio virgen y libre para aceptar los proyectos de sociedades exógenas». Otros actores que han ganado protagonismo en la última década son las organizaciones no gubernamentales, que han comenzado a trabajar en dos áreas y con actores bien diferenciados. Por un lado, las organizaciones de defensa y apoyo a las comunidades indígenas en sus reivindicaciones históricas, y, por otro, las que trabajan en la protección y gestión de los recursos naturales.

Las ONGs especializadas

A continuación estudiaremos la llegada y acción de las organizaciones no gubernamentales, nuevos actores que se acoplan al dinamismo con objetivos diferenciados, es decir, no productivos, y facilitados por el apoyo internacional.

Las ONGs ambientalistas: el redescubrimiento del Chaco virgen y la búsqueda de tierras

La llegada reciente y el interés creciente de las ONGs en el Chaco deben ser entendidos en el contexto nacional y como resultado de fenómenos económicos y ambientales del país. En efecto, las primeras organizaciones ambientalistas surgen a finales de la década de 1980 e inicios de la siguiente, preocupadas por la deforestación causada por el avance de la frontera agrícola en la región Oriental. La aceleración de la deforestación sumada a la aparición de otros focos de problemas ambientales, como la contaminación de los recursos hídricos y los residuos sólidos domiciliarios, provocaron una multiplicación de organizaciones privadas que, en cierta manera, redujo el mercado de trabajo en la región Oriental. En este contexto, el Chaco surge como una opción para continuar los trabajos de gestión y manejo de los recursos naturales como opción válida y con mayor cantidad y diversidad de recursos naturales que en la región Oriental.

La disponibilidad de datos y estudios científicos sobre la biodiversidad del Chaco, resultado de las cooperaciones anteriores, se convirtió fácilmente en sustento para nuevos proyectos de cooperación, esta vez alimentados y sostenidos por organizaciones transnacionales de protección de los recursos naturales. Las redes ambientales más importantes del mundo se interesan en el Chaco como espacio semisalvaje, con escasa población y con extrema urgencia de gestión ambiental para evitar los conflictos de uso de suelo y degradación ambiental que padecía la región Oriental. En el mismo periodo, década de 1990, los resultados de las investigaciones del Centro Experimental Chaco Central ya habían adelantado los riesgos de desertificación y salinización del sistema agrícola menonita. Con una preocupación más productiva que ambiental, los menonitas toman conciencia de la problemática ambiental asociada a la economía. No es de extrañar que la primera ONG que trabaja en el Chaco haya sido creada por miembros de la comunidad menonita. Si bien existían otras instituciones trabajando en algunas comunidades rurales del extremo sur del Chaco, en las proximidades de Asunción, asumimos que no tenían una vocación chaqueña y se reducían a experiencias concretas de producción agroecológica.

La Fundación para el Desarrollo Sustentable del Chaco, conocida por sus siglas DESDELCHACO, surge en 1997 como resultado de la preocupación ambiental de algunas personalidades menonitas vinculadas al poder político de Asunción y de varios productores ganaderos. Nótese la connotación territorial del nombre de la organización, Desdelchaco, en la pronunciación de la misma. Si se separan las palabras se puede entender como «Desde el Chaco», en alusión directa a la independencia de las organizaciones ambientalistas provenientes de Asunción. Asimismo se refuerza la idea de que las soluciones a los problemas del Chaco serán administradas por gente del Chaco, en este caso los principales actores socioeconómicos de la zona, los menonitas. Los representantes políticos electos del departamento de Boquerón, miembros de la comunidad menonita, tomaron conciencia de los problemas de contaminación y degradación de los recursos naturales en la región Oriental. Con la intención de «ade-

lantarse» a estos problemas surge esta organización. Los trabajos iniciales estuvieron dirigidos a concientizar a los productores agrícolas menonitas sobre los riesgos de desertificación y salinización del agua subterránea, como resultado del manejo inapropiado de los suelos.

Las actividades de educación, conservación y construcción de poder local orientado a una gestión más eficiente de los recursos naturales, que son siempre recursos productivos, se debieron en los últimos años al apoyo decidido de varias agencias de cooperación importantes, como la Fundación Avina de Suiza y la oficina de cooperación internacional del gobierno de Estados Unidos, USAID. El trabajo en conjunto con estas agencias externas se debe a la pertenencia a redes de organizaciones no gubernamentales de Asunción, quienes aportaron ideas y recursos para la creación de la Fundación Desdelchaco, dentro de una estrategia de incorporación del Chaco al mapa ambiental del país. Este fenómeno de «redescubrimiento» del Chaco como espacio ambiental a resguardar y administrar será seguido luego por otras ONGs.

El discurso de las entidades internacionales que apoyan a las organizaciones privadas locales es elocuente. «Existen dos modos de mirar el Gran Chaco: sorprenderse por lo poco que se ha hecho allí, o sorprenderse ante las innumerables oportunidades que ofrece esta región para hacer las cosas de la mejor manera posible. AVINA y sus líderes asociados comparten este último punto de vista, al igual que una masa crítica de emprendedores sociales que existe actualmente en el Chaco y que está intentando convertir la región en un ejemplo de progreso sostenible regional y multinacional.» El origen menonita de esta organización es clave para entender su posicionamiento en el sistema de actores y el importante papel que va a cumplir, no sólo en el aspecto ambiental, sino como una bisagra más entre el mundo externo y la comunidad menonita. Además, se desarrolla un espíritu crítico hacia el modelo productivo, estrictamente económico, ambiental y social, de las cooperativas menonitas. Esta fundación también desempeña un papel importante en la conformación de una red con los productores ganaderos «estables», es decir, con los propietarios presentes en el Chaco, en vistas a una mejor administración de los recursos naturales. Asimismo, es un actor fuerte para impulsar planes nacionales ambientales en el Chaco. Su oficina se encuentra en la ciudad de Loma Plata.

El Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) es otra ONG paraguaya joven, surgida a finales de la década de 1990, que se interesa en el Chaco, aunque no sea su área de atención prioritaria. A diferencia de la Desdelchaco, esta ONG tiene sus oficinas en Asunción, con lo cual las acciones en el Chaco tienen otras lógicas y estrategias. En un primer momento, esta organización se interesó en la porción paraguaya del Pantanal, el noroeste del Chaco, tema emergente vinculado a la gestión de los recursos hídricos. La gran dificultad del trabajo de campo de esta organización son los altos costos operativos que suponen los desplazamientos hasta esa zona.

En un segundo momento, IDEA dejó de trabajar de forma regular en el Pantanal, pasando a interesarse en la adquisición de tierras para la conservación, iniciando una novedosa forma de trabajo: la compra de tierras para la ejecución de proyectos y para

asegurar la disponibilidad de los recursos naturales, pues éstos son amenazados por la expansión anárquica de la frontera agrícola, sobre todo de las haciendas ganaderas. En los últimos años esta organización ha adquirido 4.000 hectáreas en el departamento de Boquerón, en la zona conocida como Cañada del Carmen, en las cercanías de varias áreas silvestres protegidas, en la línea fronteriza con Bolivia y enfrente de la Reserva, también privada, El Corbalán, de 4.500 hectáreas de extensión. Esta propiedad de IDEA es la primera área de conservación transfronteriza paraguaya.

Con una exitosa gestión internacional, esta ONG de vocación internacional ha trabajado en crear y fortalecer corredores biológicos entre parques nacionales de Bolivia y Paraguay, situados en las zonas fronterizas. La tercera organización no gubernamental que trabaja en el Chaco es la Asociación Guyra Paraguay, orientada al estudio de la biodiversidad, con énfasis en las aves (en guaraní, *guyra*). Al igual que IDEA, esta organización se interesa en la porción paraguaya del Pantanal a partir del año 2003, en trabajo coordinado con IDEA. Al igual que el Instituto de Derecho y Economía Ambiental, la Asociación Guyra Paraguay surge con el apoyo de la Fundación Moisés Bertoni, una de las ONGs ambientalistas más antiguas e importantes del país. La Fundación Moisés Bertoni fue la encargada de iniciar el trabajo con la fundación AVINA. La Asociación Guyra Paraguay diversifica su estrategia, combinando el trabajo de sensibilización y educación ambiental en los pueblos con la compra de tierras para la conservación en zonas fronterizas. Así, a partir del año 2006 comienzan a adquirir tierras, completando más de 14.000 hectáreas en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Río Negro. Éstas se adquirieron a distintos dueños y a distintos precios, oscilando entre 10 y 50 dólares la hectárea. Si bien los precios pueden parecer bajos, en realidad son altos, si se tiene en cuenta el valor que tenían antes de la llegada de los ganaderos brasileños. Las tierras de esta organización se encuentran en el vértice noreste del departamento de Alto Paraguay, limitando con Bolivia y Brasil (Vázquez, 2008).

La organización Guyra Paraguay es la responsable de la gestión de tres parques nacionales del Chaco, totalizando más de un millón de hectáreas, y recibe el apoyo financiero de World Land Trust, una organización privada de Inglaterra. Los parques nacionales administrados por esta organización, con el aval de la Secretaría del Ambiente, son Chovoreca, Defensores del Chaco y Río Negro. El fenómeno de «ambientalización de la frontera» puede ser entendido como estrategias de las ONGs para captar más recursos financieros y poder aplicar modelos de conservación eficientes. La lógica de «adelantarse» a los depredadores humanos, controlando de antemano algunos ecosistemas, es la explicación de esta conducta fundiaria de las ONGs. Llama la atención también la permisividad del Estado al dejar instalar y controlar a ONGs espacios sobre la línea fronteriza, especialmente la de Guyra Paraguay, que se encuentra sobre el punto tripartito compartido por Paraguay, Bolivia y Brasil. De esta forma la frontera evoluciona de un modelo de ocupación y gestión por fortines militares desde finales de la guerra del Chaco hasta inicios de la década de 1990, a una frontera regulada por las áreas silvestres públicas y privadas de conservación transfronteriza. La creación de parques nacionales en zonas fronterizas parece no ser solamente una característica paraguaya,

pues Bolivia dispone de idéntica distribución, sobre todo en su frontera con Paraguay. Gran parte de la línea fronteriza entre Paraguay y Bolivia está conformada por dos parques nacionales de extensión considerable. El parque Kaa-Iya del Gran Chaco, con más de 34.000 hectáreas, y el parque Otuquis, con más de 10.000 hectáreas, se encuentran sobre la línea fronteriza en una longitud de poco más de 360 kilómetros entre ambos países (Vázquez, 2008).

La organización ambientalista Sobrevivencia, que en un primer momento trabajó con los indígenas, hoy se interesa en la gestión de los recursos naturales, especialmente en los hídricos del Pantanal. Ante la imposibilidad de una presencia física regular en el terreno, debido principalmente a la gran distancia de Asunción, más de 700 kilómetros, esta organización tiene una estrategia de trabajo integrado con varias organizaciones ambientalistas brasileñas, quienes cuentan con un conjunto de infraestructuras viales, lo que les permite estar más cerca del área de trabajo y por lo tanto un mayor protagonismo. Estas organizaciones forman la llamada Red Pantanal, que articula e integra a varias ONGs en torno al recurso hídrico. Cabe señalar que, además de las brasileñas, Sobrevivencia trabaja con la organización Probioma de Bolivia, cuya sede en Santa Cruz tampoco le permite estar muy cerca del Pantanal.

Un aspecto relevante del trabajo de estas ONGs es la inexistencia de críticas o propuestas a los problemas ambientales que más afectan al Chaco. Ninguna de estas instituciones manifiesta su oposición o alternativas a la gestión de los recursos naturales por parte de los ganaderos brasileños, quienes deforestan grandes superficies para la implantación de pasturas. Tener un posicionamiento crítico ante esta problemática lleva consigo una actitud conflictiva con los actores más fuertes del territorio, por lo que estas organizaciones prefieren concentrar sus esfuerzos en las áreas «vírgenes», dejando que otras instituciones, también privadas, desempeñen el papel de «denunciantes» de la degradación ambiental. Casi la totalidad de las organizaciones privadas tienen una clara orientación, y concentración, hacia el noreste, en la porción paraguaya del Pantanal, donde se posicionan en las municipalidades, a quienes asisten y apoyan, y desde las cuales trabajan los temas de protección ambiental y desarrollo sustentable. En este sentido, las organizaciones privadas llegan inclusive a competir por posicionarse en las ciudades y actores de los alrededores.

Por su parte, Facetti (2007: 231-232) indica que cuatro zonas del Chaco presentan tendencias ambientales diferenciadas. El Chaco Central podría orientar sus sistemas productivos hacia el modelo de desarrollo sustentable, atendiendo a las múltiples innovaciones tecnológicas, principalmente de los menonitas, que hacen de la agricultura y la ganadería actividades más amigables al ambiente. La segunda zona, el Pantanal, tiende hacia una catástrofe ambiental producida por la liberación de mercurio en Brasil, cuyos residuos llegan a la zona por el río Paraguay. La tercera zona, la cuenca del río Pilcomayo, presenta un panorama muy negativo por la fragilidad ecológica. Por último, la cuarta zona, la del Alto Paraguay, tiende a degradarse de forma controlada.

Las ONGs indigenistas: defensa de tierras y tradiciones

Las ONGs indigenistas tienen una evolución similar a las ambientalistas. Las primeras preocupaciones ante la situación social, económica y sobre todo cultural de los indígenas provienen de algunos miembros de la comunidad menonita. Posteriormente, se agregan otras instituciones privadas para trabajar en la temática indígena, en su gran mayoría con sedes en Asunción, aunque algunas tienen sedes en el Chaco, en las ciudades menonitas. La particularidad de las ONGs indigenistas es que cada una de ellas trabaja con uno o dos grupos indígenas específicos. Éste es el caso de la organización Iniciativa Amotocodie, que tiene al grupo indígena Ayoreo como principal centro de interés, acompañando a los grupos establecidos en las cercanías de las colonias menonitas. Esta organización trabaja en la regulación y sostenibilidad de las relaciones entre estos grupos, hoy marginales, y la sociedad envolvente, especialmente en la defensa de la cultura indígena ante las amenazas de los megaproyectos de infraestructura que se proyectan en el Chaco. Al igual que las ONGs ambientalistas, las indigenistas han creado redes de información y cooperación con otras similares no sólo del Chaco paraguayo, sino también con sus pares de Bolivia y Argentina.

Otra organización importante es la denominada Pro Comunidades Indígenas, conocida como PCI por sus siglas. Creada en 1995, esta organización tiene por objetivo el fortalecimiento de la capacidad de autodeterminación de las comunidades indígenas. Actualmente trabajan con varios grupos indígenas; los principales son Angaite, Enxet, Sanapaná, Nivaclé-manjui, Enlhet, Guaraníes occidentales, Ñandeva y Ayoreo. El área geográfica de trabajo de esta organización se encuentra al sur de las colonias menonitas. Una de las organizaciones más antiguas es la denominada Gente, Ambiente y Territorio, conocida como GAT por sus siglas, que surge en 1993 y se dedica principalmente a asegurar tierras para el grupo indígena Ayoreo en la porción centro sur del Chaco. Parte de este grupo vive aún en estado selvático, es decir, sin contacto con la civilización circundante. En los últimos diez años, esta organización ha logrado asegurar más de 125.000 hectáreas para los indígenas, gestionando tierras que, aunque pertenecían al Estado, no estaban tituladas a nombre de los indígenas. Esta organización compite con la Iglesia protestante inglesa Nuevas Tribus por la asistencia a los Ayoreos. A diferencia de las organizaciones ambientalistas, las indigenistas disponen de una agencia más diversa de apoyo financiero internacional, aunque en menor cantidad que los primeros. Así, los principales aportantes a la causa indígena son la Red Europea Gran Chaco, IUCN, World Rainforest Movement (WRM) y Global Forest Coalition (Holanda). Otras agencias son ICCO, NORAD/Rainforest Foundation, Fondo Canadá, Intermón Oxfam, IICV, Pan para el Mundo, GTZ, e Indianerhilfe in Paraguay e.V. Como se indicó antes, las organizaciones indigenistas tienen una marcada actitud crítica hacia los actores socioeconómicos más poderosos, a quienes responsabilizan del estado de fragilidad de los grupos indígenas. Los menonitas y los ganaderos aparecen como usurpadores del territorio indígena, y los primeros como colonizadores económicos y religiosos, aculturizando a indígenas para incorporarlos a su sistema económico, donde ocupan el último lugar en la escala social.

La llegada y la acción de las organizaciones indigenistas produjeron el reposicionamiento de los intereses indígenas en la discusión del desarrollo sustentable y económico del Chaco, al mismo tiempo que constituían un poderoso vector de mundialización de los mismos. A través de estas organizaciones, los indígenas pueden ejercer sus derechos en organismos supranacionales de Europa en temas de derechos humanos y de respeto a la diversidad cultural. Una cantidad respetable de apoyo financiero está disponible tanto en Europa como en Estados Unidos, para actividades de investigación y defensa de los derechos de los pueblos indígenas. No obstante, la presencia de los miembros de estas ONGs, especialmente antropólogos, es percibida con recelo por el resto de los actores, principalmente menonitas, debido a que instrumentalizan el Chaco, creando una imagen salvaje donde los indígenas son explotados por los menonitas, y consiguiendo con esto fuertes recursos financieros para investigaciones académicas, sin favorecer realmente a los indígenas. La razón más fuerte del rechazo a los antropólogos y a las organizaciones indigenistas es que éstas denuncian la explotación y aculturación de los pueblos indígenas, así como la ocupación de las tierras que pertenecen legítimamente a los indígenas. Desde la perspectiva indígena, las ONGs aparecen como nuevas oportunidades de «recolección», tal como indica el antropólogo argentino Gordillo, al respecto de los indígenas del Gran Chaco, que «pese a haber perdido la mayor parte de sus antiguos territorios y fuentes de recolección (frutos silvestres, miel, animales), han mantenido su cosmovisión y establecido nuevas formas de recolección. Éstas se basarían en la apropiación de bienes ya existentes: la búsqueda de subsidios y mercaderías en los proyectos de las ONGs y organismos oficiales, el trabajo asalariado, la mendicidad» (Gordillo, 2006: 281).

En el análisis de Thorndahl, varias de estas organizaciones no hacen más que volver «sustentable la distribución de tareas y espacios según reglas económicas y étnicas, como durante la colonización violenta, pero con el discurso de consenso sobre el desarrollo sustentable que permite legitimar, en nombre de la pluralidad cultural, el imperativo ecológico» (Thorndahl, 1997: 163). Esta autora atribuye a estas organizaciones el refuerzo de la división entre los diferentes grupos, donde los indígenas son marginalizados bajo los modelos antagonicos de integración-autonomía, actividades monetarias-redes comunitarias y agricultura-protección de los recursos naturales. En la perspectiva de la misma autora, es interesante remarcar que si bien el discurso pro indígena es fuerte, coherente y unido cuando es construido para las agencias internacionales, se diluye y pierde fuerza con los actores locales y nacionales.

Para algunas organizaciones indigenistas, los ambientalistas no incorporan a los grupos indígenas en sus acciones debido a la excesiva concentración de sus esfuerzos en los recursos naturales. Además, constituyen una competencia en el escenario que, hasta inicios del año 2000, era dominado por las organizaciones indigenistas. Otro hecho relevante es la pertenencia a redes internacionales de diferentes envergaduras, siendo las organizaciones ambientales las que dominan el juego de la cooperación financiera movilizándolo a grandes corporaciones ambientalistas mundiales. Por su parte, las organizaciones indigenistas deben resignarse a presupuestos muchas veces inferiores, provenientes de orga-

nizaciones más modestas, casi exclusivamente europeas. En lo concerniente a relaciones con los demás actores, sólo las organizaciones ambientalistas mantienen relaciones estables con el resto de los actores, principalmente mennonitas. Esto se explica por el interés central de las mismas, que incorpora muy pocos elementos problemáticos, como el acceso a la tierra o las relaciones laborales entre los indígenas y mennonitas o estancieros. Todo ello facilita bastante las alianzas de las organizaciones ambientalistas con los demás actores. Con el objetivo de concluir la mirada panorámica sobre los actores secundarios del sistema mennonita, estudiaremos uno de los actores recientemente aparecidos en la escena, el grupo La Victoria.

Conclusiones: La empresa La Victoria, más allá del Chaco y de Paraguay

Otro actor que completa el escenario socioeconómico del Chaco es la empresa La Victoria, perteneciente al grupo empresarial de la Iglesia de la Unificación, liderado por el autodenominado reverendo Moon, cuyo nombre verdadero es Yong Myung Moon, pero llamado comúnmente Sun Myung Moon. Parte de la construcción del mito religioso de este grupo está dado por este nombre. Nótese que el nombre Sun y el apellido Moon hacen referencia, al menos en inglés, al sol y a la luna, el día y la noche, conformando la totalidad del universo. Conocida popularmente como Secta Moon, este grupo religioso es también conocido por sus actividades económicas en el mundo entero, especialmente en Estados Unidos y Asia. Si bien los casamientos grupales son muy mediatizados, el interés religioso tiene el mismo peso específico que el económico, e incluso es instrumentalizado por este último. Según un periódico de Chile (*La Tercera*, 15 de mayo de 2000) y demás publicaciones periodísticas, el poderío de la secta se sostiene en 160 empresas transnacionales relacionadas con la construcción de maquinaria, alimentos, armas, construcción de barcos, actividades bancarias y comunicaciones. Estas empresas están articuladas en torno al holding «Tonguil», unificación en coreano, conformada por la industrial Hankook, Il Shin Stone, Il Sung Construction, Seil Tour System, The Segye Times y la fábrica de ginseng Il Hwa. En el ramo alimentario está Happy World. El sector de la construcción naval está a cargo del holding One Up, con el que se relacionan otras multinacionales como Master Marine e International Oceanic Enterprises, también fabricantes de los barcos Post Panamax. En el ámbito de las comunicaciones de masas, la secta es propietaria de New World Communications (NWC), del periódico *The Washington Times*, cuya cadena se ha extendido por toda América Latina, y del semanario *Tiempos del Mundo*.

El reverendo Moon se interesó en América del Sur a partir de mediados de 1975, en el transcurso de un viaje a esta región, a la que denominó «Jardín del edén». Paralelamente, fue parte del engranaje geopolítico y militar norteamericano de la Liga Anticomunista Mundial (WACL). Con operaciones de inteligencia en Asia y América, la secta Moon fue una de las organizaciones responsables de contrarrestar y luchar contra los movimientos sociales y políticos que reivindicaban la democracia durante las décadas

de las dictaduras militares en América del Sur. Paraguay no era ajeno a estas influencias, y organizó varios encuentros regionales, el primero en 1977, donde incluso propuso la destitución de los sacerdotes adeptos a la teología de la liberación. Este encuentro fue presidido por el entonces presidente de Paraguay, general Alfredo Stroessner.

La secta Moon, al igual que la Liga Mundial Anticomunista, vivió un periodo de crisis durante el gobierno de Carter en Estados Unidos, pues éste decidió presionar a las dictaduras latinoamericanas. Posteriormente, con la llegada de George Bush, la secta ganó terreno y se implantó con mayor fuerza en América del Sur, eligiendo Uruguay como sede política y económica. El posicionamiento político de la secta aumentó aún más gracias al contacto sostenido y sistemático con autoridades nacionales de Uruguay, Paraguay y Argentina. En el año 2000 la secta compró más de 600.000 hectáreas en el Chaco, de la antigua sociedad Carlos Casado, quien de esta forma, y luego de más de un siglo de presencia en la zona, abandona este territorio pasando la posta al grupo empresarial La Victoria. Según Dalla-Corte, la secta pagó por las tierras un total de 22,5 millones de dólares (Dalla-Corte Caballero, 2009: 362). El traspaso de la propiedad generó una crisis local que desencadenó luego en un tema de discusión nacional, por la suerte que correría la comunidad local que habitaba en tierras de la empresa, y por las intenciones y proyectos de ésta (Vázquez, 2008).

Los partidos políticos de la oposición pidieron inclusive la expropiación de 150.000 hectáreas destinadas a los pobladores de Puerto Casado, ex empleados de la compañía del mismo nombre hasta 1996. Este momento fue aprovechado por los líderes políticos locales y regionales para inscribirse en la lista de futuros dueños de las tierras. La oposición de la secta movilizó inclusive a la diplomacia coreana en Asunción, argumentando la existencia de un tratado de protección de inversiones entre Paraguay y Corea. Finalmente, en el año 2005, el Estado expropió poco más de 50.000 hectáreas, pero sin que se haya hecho efectivo realmente el traspaso de las tierras a los beneficiarios. El Estado contó con el apoyo de la Iglesia católica, así como de varias ONGs, sin que se discuta la ideología religiosa de la secta Moon. Ante esta situación, la empresa La Victoria realizó algunas mejoras e inversiones físicas para justificar la propiedad, iniciando una serie de proyectos menores de agricultura y ganadería, al mismo tiempo que donaba 50.000 hectáreas al Estado paraguayo con la condición de suspender la expropiación. Paralelamente, la empresa planea varios proyectos productivos de importancia con énfasis en la ganadería «ecológica» y el turismo vinculado al Pantanal (según constaba en el sitio web de la empresa a inicios de 2004 (www.lavictoriasa.com), casi íntegramente en idioma coreano, con algunas secciones en inglés).

Para fines de 2007, según el sitio Web, esta vez ya en idioma español, la empresa contaba con más de 12.000 cabezas de ganado, y su objetivo eran 50.000 animales vacunos. El mejoramiento genético se orienta a la exportación, aprovechando las condiciones de mercados regionales y mundiales. A tal efecto, la empresa destina 100.000 hectáreas a la producción ganadera con pasturas naturales y 20.000 hectáreas con pasturas implantadas. Se proyectan inversiones de tres millones de dólares para el año 2012. Uno de los proyectos consiste en la construcción de un moderno frigorífico que

será alimentado con la producción de la misma empresa. Además de la cría de ganado vacuno, se dispone de un millón de cabras destinadas a la producción de carne y queso para el mercado externo, principalmente Israel y Arabia Saudí.

Otros rubros agrícolas que se proyectan producir son la stevia, un edulcorante natural, la yerba mate, el sésamo, miel y frutas. Todos los sistemas productivos serán, según el discurso oficial, de carácter ecológico. Otro proyecto importante es la reforestación, con más de 15.000 hectáreas y un millón de dólares de inversión. Se plantea el cultivo de eucalipto para la producción de celulosa. El único proyecto que ha visto la luz es el que ha puesto en marcha la Fundación para el Desarrollo Sustentable de las Américas (nótese la clara vocación regional y continental del grupo Moon, asociada a un discurso ambiental), ligada al holding Moon, en Puerto Leda, al norte del resto de las tierras de la empresa. Esta iniciativa tiene una cierta independencia del resto de las inversiones del grupo en el Chaco, tanto en términos geográficos —pues no forma parte del mismo bloque— como, y sobre todo, por sus actores. En efecto, en el año 2000 se instaló en Puerto Leda un grupo de japoneses, y con fuertes inversiones montaron una pequeña ciudad orientada al turismo de investigación y de naturaleza. Con una inversión inicial de cinco millones de dólares, los japoneses han instalado una infraestructura hotelera mínima: habitaciones de lujo, piscinas, auditorio con capacidad para 200 personas, comunicaciones satelitales, pista de aterrizaje (la forma más práctica, rápida y hasta económica es el transporte aéreo desde Asunción), entre otros. Esto está muy vinculado a las constantes reuniones de los miembros de la secta Moon: en Brasil, la primera inversión también ha sido la instalación de infraestructura hotelera. Ante la inexistencia de medios de comunicación tradicionales facilitados por el sistema paraguayo (rutas, teléfono, Internet), se requiere de equipos de comunicación satelitales y de servicios de Internet provistos por empresas brasileñas.

La instalación de esta infraestructura demandó mano de obra que fue facilitada por las comunidades indígenas de los alrededores. Asimismo, los servicios hoteleros están orientados a un turismo de naturaleza aprovechando la cercanía del Pantanal, en su parte paraguaya. Estas proyecciones deben ser analizadas como parte de un discurso de inversiones a corto y medio plazo, para dar señales a las autoridades nacionales y locales sobre las intenciones de la empresa de implementar proyectos productivos que consumirán la mano de obra local, hasta hoy ociosa desde el cierre de la fábrica de tanino. Una constante en el discurso de esta compañía es la producción agrícola, ganadera y forestal de carácter sostenible y respetando la naturaleza. La presencia de este grupo económico en el Chaco obedece a una estrategia continental, pero facilitada o restringida por la disponibilidad de grandes cantidades de tierra para la venta. De esta forma, las tierras de esta empresa en el Chaco no significan necesariamente la consecución de proyectos productivos específicos, sino quizá simplemente el control de grandes extensiones, estén o no bien ubicadas. Estas ideas refuerzan la hipótesis del control fundiario antes que la búsqueda de espacios productivos.

La relación de la empresa La Victoria con el resto de los actores es muy diversa. Según la expresión de un ganadero brasileño que encontramos en el Chaco, los ganade-

ros brasileños expresan su desacuerdo con la presencia de la empresa en el Chaco, y la consideran un «freno al desarrollo» de la región. Esta reflexión se basa principalmente en que la empresa compró las tierras pero no instala ningún sistema productivo, siendo por lo tanto un espacio improductivo. En este sentido, la lógica de inversión-producción-exportación de los ganaderos brasileños considera que el espacio no es suficientemente aprovechado por la empresa. Además, y a diferencia de otros propietarios en el Alto Paraguay, la empresa La Victoria no venderá sus tierras, reduciendo el margen de expansión de los ganaderos brasileños. La relación entre los menonitas y la secta Moon es mucho más dinámica y positiva, pues la secta depende de la infraestructura y los servicios logísticos de los menonitas para introducir mejoras en su propiedad. Son maquinarias y técnicas menonitas las que abren caminos, preparan los terrenos para la ganadería y surten de productos. Llama la atención que algunas críticas de los menonitas a la secta no sean de índole ideológica o religiosa, sino estrictamente económicas. De todas maneras, y al igual que los ganaderos brasileños, la secta Moon representa nuevos clientes y nuevas oportunidades productivas para los menonitas, quienes se refuerzan y se constituyen en el eje central de la economía del Chaco.

La presencia de este grupo económico en el Chaco obedece a una estrategia continental, pero facilitada o restringida por la disponibilidad de grandes cantidades de tierra para la venta. De esta forma, las tierras de esta empresa en el Chaco no significan necesariamente la consecución de proyectos productivos específicos, sino quizá simplemente el control de grandes extensiones, estén o no bien ubicadas. Estas ideas refuerzan la hipótesis del control fundiario antes que la búsqueda de espacios productivos. En efecto, hasta el momento muy pocas acciones se han concretado, lo que refuerza la hipótesis de que la intención principal de esta empresa es el control inmobiliario con proyectos a medio y largo plazo, dentro de una estrategia continental de posicionamiento sobre los dos ejes principales de comunicación continental: los corredores viales interoceánicos y la vía fluvial conformada por los ríos Paraguay y Paraná.

Dentro de una lectura regional y continental, la secta Moon ha adquirido tierras en Brasil, próximas a las propiedades del Chaco, en la región fronteriza con Paraguay, en Bolivia, en Argentina y en Uruguay. En este último país, la secta controla bancos, hoteles y actividades portuarias. Los diferentes grupos empresariales controlados por la secta Moon desempeñan papeles diferenciados en cada uno de los países vecinos a Paraguay. En Bolivia, al igual que en Paraguay, la secta se interesa en un acercamiento al poder político para obtener un posterior posicionamiento económico, siempre vinculado al rol de espacio «interior» del continente y de «transición» entre las fachadas este y oeste de América del Sur, así como entre los procesos de integración regional del Mercosur y la Comunidad Andina. El gas boliviano parece ser otro recurso codiciado por la secta, no su extracción, sino su comercialización y su ofrecimiento a los mercados mundiales, que vendría facilitado por el control que tienen otras empresas de la secta en los puertos transatlánticos chilenos. Además, la secta estaba buscando tierras en la comunidad de San Matías, en el Pantanal boliviano, a menos de 200 kilómetros de las tierras de la secta en el Chaco paraguayo y a sólo 100 kilómetros de las inversiones en Brasil,

conformado un «archipiélago Moon» en los alrededores y en todos los países con acceso al ecosistema Pantanal.

En Chile, donde reside uno de los hijos del reverendo Moon, los intereses se concentran en las actividades portuarias, especialmente en el megapuerto de Mejillones. Este país cumple el papel de bisagra externa para operaciones comerciales entre América y Asia, privilegiando el océano Atlántico. Además, el puerto de Mejillones es el lugar ideal para la construcción de los barcos cargueros Panamax, pues es uno de los pocos puertos sobre el océano Pacífico con profundidad suficiente. En Brasil, la secta se ha implantado en el estado de Mato Grosso do Sul, fronterizo con Paraguay y Bolivia; dispone de 83.000 hectáreas en la zona de Jardim, con una inversión de más de 25 millones de dólares, donde el objetivo, según el representante local, es llegar a las 100.000 hectáreas, mediante la compra de nuevas parcelas, actualmente ganaderas. La presencia de la secta produjo una fuerte especulación y el aumento consiguiente de los precios de los inmuebles rurales. El Ministerio de Defensa brasileño se preocupó de la presencia del grupo en zonas fronterizas, y para disminuir su poder incluyó 32.000 hectáreas pertenecientes a la secta en el Parque Nacional da Bodoquena. En la estrategia de disponer y controlar territorios, la secta incorpora la táctica de la aceptación social mediante inversiones en otros ámbitos. En este sentido, la secta construyó un imponente complejo religioso, además de adquirir dos clubes de fútbol, el Centro Esportivo Nova Esperanza de la ciudad de Jardim, y el Atlético de Sorocaba, en el estado de São Paulo.

En Uruguay la secta controla una terminal portuaria en Montevideo, así como bancos, hoteles y el periódico *Las Últimas Noticias* (además del periódico regional *Tiempos del Mundo*, destinado al público del Mercosur). Una larga «amistad» con los presidentes de este país explica las razones de su elección como una de las sedes regionales más importantes. En Argentina la secta parece no disponer de tierras ni otras empresas, salvo el periódico *Tiempos del Mundo*, órgano oficial de la secta bajo el manto de un periódico de vocación mundial. Al igual que en Uruguay, la secta mantiene relaciones estrechas con actores del ámbito político. En conclusión, la secta Moon dispone de varios recursos: financieros y políticos para cada tipo de objetivo estratégico: compra de tierras, posicionamiento político en función del lugar y las condiciones político-jurídicas de cada país. En este sentido, la estrategia del «trópico de Capricornio», por el sentido este-oeste, tal como la denominan algunos periodistas chilenos, consiste en ocupar y controlar puertos marítimos en los océanos Atlántico y Pacífico, así como de disponer de tierras en zonas clave, por ejemplo en el ecosistema del Pantanal, las zonas de influencia de los corredores bioceánicos que unirán ambas fachadas continentales. La estrategia complementaria, esta vez con una orientación norte-sur, se vincula con la Hidrovía, donde la secta controla varios puntos neurálgicos de la misma, especialmente en la zona portuaria de Montevideo.

En este juego de estrategias continentales, el megapuerto de Mejillones en Chile y Montevideo en Uruguay son los puntos de contacto con el mundo, así como las llaves maestras de las estrategias de «Capricornio» y de la Hidrovía, respectivamente. Para los menonitas, los indígenas constituyen no sólo el grupo que los acogió en las primeras

décadas, sino también un importante stock de mano de obra para las agroindustrias de la leche y la carne. Otro papel importante que desempeñan los indígenas en el sistema menonita es el de encargarse de las actividades agrícolas «inferiores», principalmente los cultivos de sésamo, maní y algodón. La organización menonita de ayuda a los indígenas ASCIM es la instancia clave que guía y dirige el proceso de «integración» indígena en el modelo productivo menonita. En este sector, los campesinos se unen a los paraguayos para fortalecer la provisión de materia prima para las agroindustrias del Chaco Central.

Alrededor de estos actores se agrupan varias instituciones que, bajo diversos medios, estrategias y objetivos, procuran instalarse e incorporarlos a sus respectivas lógicas. Así, la Iglesia católica realiza no sólo una propaganda religiosa, sino también supe al Estado paraguayo administrando escuelas y hospitales en las zonas más alejadas. La Iglesia católica, movilizand su red mundial, adquiere tierras para los indígenas, dentro de una estrategia de fijarlos en determinados lugares, facilitando además las actividades evangelizadoras. En síntesis, se pasa de la presencia hegemónica de los militares hasta la década de 1970, a los proyectos de desarrollo económico impulsado por el Estado, entre 1970 y 1990. Luego aparecen las ONGs para volver aún más complejo el escenario, dejando todavía espacio para la llegada de nuevos actores, como la empresa La Victoria. Estas visiones sectoriales y según categorías de actores no son integrales, sólo señalan de manera analítica los objetivos particulares de cada actor, en un espacio donde el Estado paraguayo no ha estado totalmente ausente, pero tampoco ha prestado mucha atención en lo que concierne a la población y su integración efectiva en la realidad nacional.